

La política en las periferias pasivas. Las elecciones municipales de 2021 en Potosí

*Politics in the passive peripheries
Municipal elections 2021 in Potosí*

Franz Flores Castro¹

Resumen

El trabajo utiliza la noción de periferia pasiva, es decir un territorio con importantes recursos naturales y fuerte identidad, pero incapaz de generar liderazgo ni proyecto político que haga frente al dominio del centro estatal. Una de las variables que la explica, es el perfil sociopolítico del principal actor de la periferia que, a la postre, termina por bloquear la aparición de un clivaje territorial. El departamento de Potosí sería un ejemplo de este tipo de periferia, cuya riqueza mineral e identidad local no le sirvieron para cambiar su marginalidad. Sin embargo, desde el año 2010, han sucedido cambios en la composición social y en el liderazgo local que desarrollaron fuertes movimientos de protesta cívica, de abierto desafío al centro estatal. Este artículo, a partir de los resultados de las elecciones subnacionales de marzo de 2021, trata de ver hasta qué punto ha cuajado este proceso en un proyecto territorial y ver, de este modo, las condiciones en las cuales una periferia podría dejar de ser pasiva.

Palabras clave, Potosí, elecciones subnacionales, clivaje territorial, regionalismo.

1 Franz Flores Castro es doctor en Ciencias Sociales con mención en Estudios Políticos por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede Ecuador (2018). Es profesor titular de la Universidad San Francisco Xavier desde 1998 hasta la actualidad. Sus principales temas de investigación tienen relación con el Estado, clivajes territoriales, movimientos territoriales, partidos políticos y procesos electorales. Correo electrónico flores.franz@usfx.bo

Abstract

The current work uses notion of passive periphery, which is a territory with important natural resources and a strong identity but incapable to generate leadership or political project that faces dominance of the state center. One of the variables that explains this is the socio-political profile of the main actor in the periphery that ends up by blocking the appearance of a territorial cleavage. Potosí's city would be an example of this type of periphery, whose mineral wealth and local identity did not serve to change its marginality. Nevertheless, since 2010, there have been changes in the social composition and in the local leadership that have developed in strong movements of civic protest, in open defiance to the state center. This article, based on the results of the sub-national elections of March 2021, tries to show how far this process has taken shape in a territorial project and see the conditions in which a periphery could stop being passive.

Keywords, *Potosí, subnational elections, territorial cleavage, regionalism.*

Introducción

Las elecciones subnacionales de 7 de marzo de 2021 realizadas en el municipio de Potosí, dieron como ganador a Jhonny Llally del Movimiento Cívico Popular (MCP) con el 37,46%, seguido de René Joaquino por Alianza Social (AS) con el 30,63% de los votos y por Marcelino Choquehuanca del Movimiento al Socialismo (MAS) con el 11,16%.

El presente artículo estudia los resultados de estas elecciones en la capital potosina, no desde la coyuntura preelectoral sino desde el largo plazo, como producto de un cambio en la relación centro periferia, que se fue gestando en la primera década del siglo XXI con el liderazgo de René Joaquino y que se consolida cuando se desplaza al sindicato minero de la dirección del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO), que es asumida por actores de clase media, ligados a organizaciones urbanas afectadas por la pobreza y carencia de perspectivas de desarrollo local.

En la primera parte, se realiza un pequeño esbozo teórico que permite situar la noción de periferia pasiva, más un breve estado del arte sobre la distribución espacial del poder en Bolivia. En la segunda parte, se hace un recorrido por la historia de las luchas regionales, la constitución de su entidad cívica, COMCIPO, y el juego de intereses detrás de las movilizaciones

que promueve. Más adelante, hacemos un acercamiento al liderazgo de René Joaquino y su desafío al dominio del MAS en el departamento en su cargo de Alcalde y jefe de su agrupación política AS. Finalmente, recogemos los datos presentados y caracterizamos la aparición de un clivaje territorial en Potosí, precisando las condiciones de su emergencia, así como sus límites.

Metodológicamente, este trabajo se inscribe en una lógica de *process tracing*, que implica un rastreo y selección de eventos clave dentro de un mismo caso para arribar a inferencias causales más o menos sólidas (Bril-Mascarenha; Maillet y Mayaux, 2017).

Las periferias pasivas

El Estado aspira a ser un conjunto de instituciones burocráticas, de leyes y de identidad colectiva que se despliega sobre un determinado territorio que reclama como suyo. El Estado, en su devenir histórico, busca ampliar su poder territorial, establecer dominio sobre el mismo. Para ello, ya sea mediante la negociación, el acuerdo o la imposición procede a expropiar a las elites locales de su dominio sobre los medios de coerción, de administración y de legalidad para pasarlo a una burocracia asalariada y jerárquicamente subordinada al poder central, que busca afirmar una voluntad central uniforme en el conjunto de la comunidad (O'Donnell, 2004: 16-17). Weber ubica este proceso en el inicio de la constitución de los Estados modernos en Europa, precisando que “el Estado moderno se inicia por doquiera a partir del momento en que se empieza a expropiar por parte del príncipe a aquellos portadores de poder administrativo que figuran a su lado: aquellos poseedores en propiedad de medios de administración, de guerra, de finanzas y de bienes políticamente utilizables de toda clase” (Weber, 2002:1059).

Por tanto, el proceso de ampliación del dominio del Estado sobre territorios que hasta ese momento se desarrollaban obedeciendo a sus propias autoridades y acatando sus propias normas está lleno de conflictos; con frecuencia en los territorios subnacionales surgen resistencias a las pretensiones de poder estatal. Rokkan y Urvin constatan que en la Europa moderna “ha habido una multiplicación de los esfuerzos para movilizar a

las periferias, regiones e incluso las localidades en contra de los centros nacionales, y una afirmación de las minorías que reclaman su autonomía cultural y la toma de decisiones” (Rokkan y Urwin, 1982: 4).

Para Rokkan y Urwin (1982) el centro puede ser mínimamente definido como el espacio de decisión política desde donde se organiza el Estado, se proyecta la identidad nacional y se trata de organizar la división territorial del poder. En otras palabras, el centro es el lugar desde donde el Estado proyecta la unidad nacional y desde donde busca controlar, destruir u ordenar, los varios espacios donde se toman las decisiones políticas.

Las periferias, precisan Rokkan y Urwin, controlan solo sus propios recursos económicos y están más expuestos a las fluctuaciones de los mercados ubicados lejos de su territorio; están aisladas del resto de las regiones, excepto la central, contribuyen poco al flujo total de las comunicaciones en el territorio y poseen una cultura marginal (Ibid., 5).

Esta dinámica entre centro y periferia permite analizar la estructura política territorial del Estado en términos de dominio económico, control político y homogeneización cultural, con un centro que busca expandir su dominio hacia las periferias. La forma de cristalización de esta relación, da lugar a dos tipos de configuración de la distribución territorial del poder: la primera denominada monocefálica, con un solo centro o, policefálica, con varios. (Ibid.). La interdependencia deja abierta muchas posibilidades: dominio del centro, resistencias de las periferias o acuerdos negociados; depende de los contextos históricos. Esto es clave, no siempre hay un dominio del centro, aunque los Estados tengan siempre una vocación centralizadora.

Los estudios sobre regiones y regionalismos en Bolivia solo se han centrado en las regiones capaces de resistir la lógica centralizadora del Estado, es decir las periferias activas (cf. Roca, 1980; Peña y Jordán, 2006; Sivak, 2007; Soruco, Plata y Medeiros, 2008; Burbano de Lara, 2014, Vergara, 2015). El tema regional, como preocupación académica, ha estado ligado a coyunturas históricas que puso en tensión la lógica centralista del Estado boliviano. En la década de los 80, en un contexto de demanda de descentralización administrativa, se estudió tanto la fisonomía del regionalismo como el poder de las regiones para construir la democracia (Roca 1980; Calderón y Laserna 1983; Laserna 1987); en la década de los 90 y, al influjo de la Ley

de Participación Popular (1994), se hicieron varios estudios localizados en el ámbito municipal, a través del análisis de impacto en la política y en el desarrollo (Ayo, 1999 y 2011, Molina, 2005, Gray Molina 1997) y, en la primera década del siglo XXI, los aportes giraron en torno a las características, alcances y causas del pedido de autonomías departamentales, a tono con la demanda de Santa Cruz (Zegada, 2007; Vergara, 2015 y Burbano de Lara, 2014).

Sin embargo, la literatura ha prestado poca atención a las regiones que no han sido capaces de hacer frente al dominio del centro. Por ello, la apuesta teórica del trabajo radica en pensar la relación centro periferia no desde la perspectiva de las regiones que han podido, con éxito, construir un clivaje centro periferia, sino pensar aquellas regiones (las periferias pasivas) que, a pesar de detentar una identidad regional fuerte y unos recursos económicos imprescindibles para las arcas del Estado, no pueden activar un clivaje territorial.

Las luchas potosinas por su desarrollo 1952-2010

El Estado de 1952, postergación y respuesta de Potosí

Desde el inicio del gobierno de Víctor Paz (1952-1956 y 1960 -1964), la población potosina constató que estaba relegada de sus proyectos de modernización económica: los recursos y obras que el gobierno proyecta para el departamento de Potosí son magros y ninguno destinado a mejorar su capacidad productiva, al margen de las minas. En los primeros años de la revolución, se planificó la construcción de cuatro escuelas, el arreglo del templo de San Lorenzo, la construcción de un comedor para los *Kajchas* (cooperativistas), la edificación de un cine popular y la reparación del estadio Sucre, cuando en el departamento de Santa Cruz se proyectaba vías camineras, ferrocarril, créditos a los productores y fomento a la migración nacional e internacional.

En la población potosina, ello es motivo de discusión y preocupación, aun más para la clase media que ve el futuro sin esperanza. En 1955, bajo

el patrocinio de la autoridad comunal y en una “gran asamblea popular”, se planteó organizar un comité para la defensa de los derechos del pueblo Potosino, para lo cual se conformó un comité *ad hoc*, dirigido por Armando Alba y José Enrique Viaña, con la tarea de elaborar un Plan para la Constitución del Comité ejecutivo de la Junta².

No se tiene mayores datos de este Comité, al parecer no logró cuajar en una organización cívica sólida que funcione en el largo plazo y sea un mecanismo para canalizar las demandas de los potosinos. Probablemente a ello contribuyó que esta entidad estuviera impulsada por intereses políticos y no regionales. Un mecanismo para aumentar el poder de los sindicatos mineros, pero no necesariamente para defender los intereses de Potosí.

Un año después, el presidente Hernán Siles en medio de una fuerte crisis económica aplicó el Plan Eder de estabilización monetaria, que hizo recaer el peso de las medidas en el sector minero con el congelamiento de salarios y despidos. En Potosí, el activo núcleo obrero donde figuran lechinistas, comunistas y emenerristas de izquierda, está lejos de quedarse de manos cruzadas. El 10 de noviembre, fecha de la efeméride departamental crean el Comité de Defensa de los Intereses de Potosí (CODEIPO), presidido por Humberto Ramírez del Control Obrero, seguido del abogado Oscar Bonifaz como vicepresidente y el dirigente del Partido Comunista de Bolivia (PCB) Simón Reyes como representante de la Central Obrera Departamental (COB).

El periódico que da a conocer la noticia, precisa que CODEIPO es la “suma de organizaciones sindicales y populares de modo que están representadas todas las clases y capas sociales interesados en la realización de postulados progresistas”, aunque deja en claro que la misma debe estar “dirigida y sustentada por la clase obrera, minera en particular, de decisiva importancia en esta organización popular [...] y mientras permanezca la clase obrera como bases y dirección CODEIPO será un organismo auténticamente popular”³.

En todo caso, CODEIPO no logró ni un solo de sus pedidos. Al contrario, tanto los despidos, la ausencia de recursos para la capitalización de la

2 *Trinchera*, “Potosí se levanta para la defensa de sus derechos”, 28 de agosto de 1955

3 *Democracia Popular*, “Unidad organizada del pueblo potosino”, 23 de noviembre de 1958.

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y la falta de apoyo a la creación de plantas fundidoras fueron la constante.

Años después, el 17 de octubre de 1969, se creó la Unión Cívica Potosinista de defensa de los intereses de Potosí a iniciativa de la Universidad Tomás Frías. Su directiva estaba compuesta por miembros de la clase media urbana como Armando Alba (que ya lo vimos impulsar un comité cívico en 1954), Abelardo Villalpando (rector de la universidad); el empresario Roberto Buitrago, el abogado Antonio Rocha, el ingeniero Raúl Salazar, Jorge Gutiérrez, Luis Campos y Ernesto Poppe⁴.

Persuadidos que la situación política todavía no permitía organizar un movimiento que pueda levantar sospechas de “político”; por lo mismo, esta organización señala que no lo mueve más que el cariño a Potosí y hace un llamado a la unidad potosina, puesto que cree que el potosino es apático, pesimista, individualista y poco proclive a la unión y progreso.

De todas maneras, este comité no logró su principal objetivo de comprometer al gobierno en una planta de fundición de zinc, y su existencia fue efímera. El general, Hugo Banzer Suárez en 1971 dio un golpe de Estado, iniciando siete años de gobierno donde sindicatos y partidos políticos estuvieron impedidos de participar del juego político.

El nacimiento de COMCIPO

El gobierno de Banzer para la región potosina solo significó pobreza y marginalidad. Entre 1970 y 1975, el Banco Agrícola apenas había desembolsado para Potosí un 0,69 por ciento del total de sus recursos, mientras que para Santa Cruz ese porcentaje llegaba al 69,64% (Dunkerley, 1987: 317-321).

Un dato relevante es que el régimen militar veía con cierta simpatía la creación de comités cívicos. Bajo la certidumbre que estaban dirigidos por elites locales, contaban con ellos para frenar la movilización popular (Lavaud, 1998). Esta posibilidad política, aunque pequeña, fue aprovechada por un grupo de mujeres potosinas: el 4 de agosto de 1975 se fundó el Comité Cívico Femenino de Potosí conformado por Yolanda G. de Zilvetti,

4 *La Época*, “Comité Cívico e industrialización del zinc”, 10 de noviembre de 1969.

Esperanza de Poppe y Lucy de Pérez de Alcalá. Bajo el discurso que en su iniciativa “no hay ánimo político alguno” y que solo están imbuidas de un profundo “espíritu potosinista”, plantean al gobierno un pliego de demandas largamente postergadas, como la construcción de una planta de fundición de zinc, vinculación caminera, centros de salud y la construcción de un aeropuerto.

Esta iniciativa, finalmente desembocó en la constitución, ya definitiva, del Comité Cívico Potosinista (COMCIPO) el 2 de agosto de 1976 a la cabeza de Antonio Rocha, bajo la demanda central de una planta de fundición de zinc.

Días después, en una gran reunión de instituciones, se convocó, para el 13 de agosto, a una marcha de la “potosinidad”, que logró reunir a unas 50.000 personas. Sin embargo, la marcha de COMCIPO fue una oportunidad de oro para que los actores sindicales y de izquierda, rompiendo la censura, hicieran conocer su condena al gobierno militar y demandaran el fin de la clausura política.

COMCIPO en el Estado neoliberal

La cuarta presidencia de Víctor Paz (1985-1989) puso en marcha el modelo neoliberal que generó profundos cambios. En primer lugar, se desestatiza la explotación de minerales, la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) deja de tener tuición sobre el inmenso territorio minero y sus instalaciones, así como sus estudios de prospección y explotación pasan a actores privados como los mineros medianos y cooperativistas. A la vez, se promueve un cambio en la estructura de mediaciones políticas: de un modelo de representación basada en actores corporativos como los sindicatos y la confederación de empresarios privados, se pasa a un sistema de partidos políticos en cuya base estaban el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y Acción Democrática Nacionalista (ADN) (Torrico, 2014; Exeni, 2016).

Con COMCIPO completamente en poder de los sindicatos mineros, el mismo es instrumentalizado para plantar oposición al modelo neoliberal.

Con la nueva política económica ya en plena ejecución, COMCIPO, “por instrucción de la COB”, buscó ser un mecanismo mediador entre el gobierno

y la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), para evitar el cierre de las minas, tomando en cuenta que ello afectaría a la región toda⁵. Pero, este propósito tuvo muy poca efectividad ya que como señala el presidente de COMCIPO de entonces Luis Fernández Fagalde “la respuesta de parte del gobierno siempre era la misma, la explicación técnica de que era insostenible Comibol desde el punto de vista financiero y no quedaba otra alternativa que su cierre”⁶.

Posteriormente se luchó por la puesta en marcha del complejo metalúrgico de Karachipampa. Esta empresa de fundición de plomo y plata fue concebida en 1975, en el gobierno de Hugo Banzer, como parte del programa de industrialización. El proyecto fue concluido y entregado en enero de 1983, sin embargo, hasta la actualidad, nunca ha funcionado. La planta, con una capacidad de tratamiento de 51.131 toneladas de mineral, necesita de una cantidad de concentrados de plomo y plata que nunca pudo producir el país. Por ejemplo, en el caso del plomo, Karachipampa necesitaba anualmente de 24.216 TMF de concentrado, cuando la sumatoria de todo lo que producía el país llegaba, entre 1980 y 1989, a solo 11.210 TMF, cantidad insuficiente para que la planta opere en condiciones de rentabilidad (Espinoza, 2010: 304-307).

Con todo, para las fuerzas aglutinadas en torno a la Central Obrera Departamental (COD), que habían tomado la dirección de COMCIPO, la demanda de Karachipampa ofrecía una gran oportunidad para generar un escenario de descrédito e inestabilidad al gobierno del MNR, colocándolo en el brete de tener que responder a un asunto técnicamente irresoluble, pero políticamente explosivo.

Situación parecida ocurrió con la iniciativa del gobierno de Jaime Paz (1989-1993) de industrializar el litio del salar de Uyuni, la más importante reserva de litio del mundo. Esta iniciativa encontró una férrea oposición de COMCIPO que bajo el discurso de la “defensa intransigente de los recursos naturales” en largas jornadas de lucha cívica hizo fracasar el proyecto. Su

5 Carlos Derpic (expresidente de COMCIPO), en conversación con el autor, agosto de 2016.

6 Luis Fernández Fagalde (expresidente de COMCIPO), en conversación con el autor, agosto de 2016.

directiva, alineada ideológicamente a la izquierda y articulada al sindicato minero, decía que: “para colmo de males se pretende ahora entregar el salario de Uyuni a una empresa transnacional y **es que dicha entrega se quiere realizar al interior del modelo que privilegia la inversión extranjera sin medir las consecuencias que ella supone**” (COMCIPO, Matutino El Siglo, 15/03/1990, resaltado mío).

Las luchas regionales en el gobierno del MAS

Entre los años 2000 y 2006 se produjo una crisis de Estado que se manifestó como: a) pérdida de la capacidad de representación de los partidos políticos; b) debilidad de la autoridad estatal junto a un clima de movilización y protesta; c) crisis de nación como factor de identidad colectiva; y d) deslegitimación del Estado por la profundización de la pobreza y la crisis económica.

En este contexto, aparecieron nuevos movimientos sociales que, enarbolando un discurso nacionalista e indigenista, protagonizaron un ciclo de protestas y movilizaciones que hicieron retroceder al Estado en varias de sus medidas (alza de precios del agua en 2000, incremento de impuestos en 2003), al punto que obligaron a la renuncia de dos presidentes de manera consecutiva, Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre de 2003 y Carlos Mesa en junio de 2005.

Desde que Evo Morales llegó al poder en enero de 2006, el gobierno tuvo una relación cercana con COMCIPO y la COD reforzó su control sobre la entidad cívica. A fines de mayo el frente “Anticorrupción” ganó las elecciones para la directiva de COMCIPO. La misma estaba compuesta por Alejandro Gutiérrez (presidente) representante de la COD; seguido por Humberto Morales de la Federación de Juntas Vecinales (FEDJUVE); Bladimir Díaz del Barrio Satélite; Juan Carlos Colque de la Federación de la Prensa y Epifanio Filanco de la Federación de Campesinos.

La cercanía de la dirigencia cívica con el MAS era evidente. El 1 de octubre el presidente Morales visitó la sede de COMCIPO y los cívicos aprovecharon para hacer conocer su pliego de demandas, como la construcción de un aeropuerto internacional y la construcción de caminos; pero el pliego colocaba especial énfasis en medidas que claramente buscaban afectar los

intereses cooperativistas como una ley especial para preservar el Cerro Rico: redacción de un nuevo código de minería y refundación de la COMIBOL⁷.

De todos modos, los cambios en la minería y la estatización de la misma estuvieron más lejanos que nunca: el gobierno no solo que no controlaba la minería, sino que promovía la inversión extranjera. COMCIPO callaba y el gobierno no tuvo mayor problema en fomentar el ingreso de capitales externos a las minas potosinas que, como vimos en el periodo previo, era un tema central para los cívicos. Demandas como el camino asfaltado entre Potosí y Uyuni, la construcción de un hospital de tercer nivel, de un aeropuerto y de una fábrica de cemento fueron permanentemente postergados.

La directiva de COMCIPO, al mando de Gutiérrez, nunca llamó a una huelga cívica, aceptando tácitamente las promesas y postergaciones a las demandas potosinas. En abril de 2008, Gutiérrez terminó su gestión en medio de fuertes críticas por su postura afín al MAS (posición que, dicho sea de paso, nunca desmintió puesto que se declaraba un seguidor de llamado proceso de cambio). Dejaba en agenda varias peticiones como el traslado de la sede de la COMIBOL, la construcción de un aeropuerto, la recuperación de las aguas del Silala, que fluían a territorio chileno sin pagar por ello, el pavimentado de la ruta Tarija - Potosí, la construcción de hospitales de segundo y tercer nivel, la recuperación de los recursos del Salar de Uyuni y una definición respecto de las autonomías.

El profundo cambio en la dirección de COMCIPO

Las elecciones para la renovación del directorio de COMCIPO estuvieron precedidas por fuertes críticas a la de gestión de Gutiérrez. Un representante de la FEDJUVE afirmó:

[...]el enemigo no es COMCIPO, sino ese famoso “locoto” (sic) porque no ha hecho nada por Potosí y lo que deberíamos buscar es sacarlo de ahí porque lo único que hace es dañar nuestra región [...] nunca nos ha dado satisfacciones de progreso desde COMCIPO y eso sí es repudiable (*El Potosí* 28/06/2008).

7 *El Potosí*, “Pliego departamental”, 1 de octubre de 2006.

Gutiérrez, a lo largo de su gestión nunca había llevado a cabo ni una sola medida de presión, pese a las sobradas razones para hacerlo. Su gestión sobre todo trató de afectar los intereses de los cooperativistas, buscar la reactivación de la COMIBOL y respaldar la lucha contra las autonomías del MAS.

El 20 de agosto se realizaron las elecciones para la renovación de la directiva de COMCIPO, donde resultó ganador con 94 votos de 169 posibles, un frente promovido por los sectores sindicales y el MAS. Enrique Leytón, de la COD, fue elegido como nuevo presidente en medio de un profundo malestar de varias juntas vecinales que no pudieron votar pese a que habían solicitado su afiliación a la institución cívica.

Naturalmente, la nueva directiva siguió los pasos de la anterior: ratificó las conocidas demandas de nacionalización de la minería, el incremento de impuestos a la misma y la prohibición de la explotación del Cerro Rico en ciertas áreas, pero sin asumir medidas de presión que, de verdad, obliguen al gobierno a atenderlas y no solo a postergarlas, como era lo usual.

Sin embargo, la noche del 13 de abril de 2009, la luna de miel entre el gobierno y COMCIPO llegó a su fin. Un consejo consultivo decidió suspender al presidente Enrique Leytón, por considerarlo afín al MAS (Leytón había conseguido un cargo en la COMIBOL) y cambiarlo por Celestino Condori Mamani, en ese momento vocal de la entidad cívica.

Condori había alcanzado notoriedad por su participación como dirigente estudiantil en un largo conflicto en la Universidad Tomás Frías en torno a un incremento de los salarios de los docentes. En un momento amenazó con inmolarse con dinamita en la plaza de Potosí, motivo por el cual fue conocido como "*Pikachuri*", en alusión al minero que perdió la vida en intermediaciones del Parlamento en La Paz, precisamente por explotar una carga de dinamita que llevaba pegada al cuerpo. Condori estudió administración de empresas y provenía de los estratos populares de la ciudad.

El cambio en COMCIPO fue súbito e inmediato, al punto que un titular del periódico local El Potosí señaló: Potosí despierta: el 18 de abril un consejo consultivo de la entidad cívica convocó a un paro de 24 horas para demandar la recuperación de las aguas del río Silala, la construcción de una fábrica de cemento y la cesión de acciones de plantas hidroeléctricas. Ante este nuevo escenario, el gobierno envió a representantes de segunda

línea para negociar las demandas, lo que fue motivo de rechazo. Según Condori desde el poder central se mandaban “autoridades sin poder de decisión como el viceministro Coro ya que las autoridades nacionales se acostumbraron a dirigentes funcionales que no peleaban por los intereses de Potosí” (Condori en El Potosí 25/04/2009).

Desde ese momento, las acciones de COMCIPO fueron de enfrentamiento con el gobierno. Todas las demandas, hasta ese momento postergadas o congeladas por el gobierno del MAS, se colocaron en agenda y ellas devinieron en tensión y conflicto.

Al no haber respuestas concretas del gobierno, las huelgas cívicas se sucedieron en cascada. A la demanda de preservación del Cerro Rico, se añadió la renuncia del presidente de la COMIBOL, la construcción de un aeropuerto, la fábrica de cemento y la construcción del camino entre Tarija y Potosí. Los paros fueron respaldados de manera militante por parte de la población potosina que sentía que su región no estaba aprovechando el momento de bonanza minera y temía que, nuevamente, ella se quede sin nada.

No estaban equivocados, el gobierno no subió los impuestos a la minería, no limitó la explotación del Cerro, no diversificó la economía, ni generó empleo que no sea el relacionado directamente con la minería. Si bien, como producto de la bonanza de los precios de las materias primas, la gobernación recibió recursos como nunca antes, la cantidad de los mismos no guardaba relación con las cifras millonarias que generaban las exportaciones de los minerales potosinos.

En suma, en 2010, existe un profundo malestar. La idea que Potosí estaba siendo engañada por el gobierno y saqueada por las empresas mineras es una realidad objetiva y palpable, lo que legitima el discurso radical de los dirigentes cívicos y lleva a la ciudadanía a respaldar sus acciones. Para julio de 2010, las condiciones para un conflicto de magnitud están completamente dadas. En primer lugar, se había reinstalado la idea de saqueo; segundo, la composición de la directiva del COMCIPO había cambiado de manera radical, ahora estaban al frente de la entidad cívica personajes de los sectores de clase media y pobre, pero no ligados orgánicamente a la COD. Tercero, el gobierno se había mostrado soberbio y sordo a las demandas potosinas.

Potosí y sus dos largas huelgas cívicas

En julio de 2010, la entidad cívica pidió reunirse con el gobierno para resolver las añejas demandas del departamento. Lo hizo bajo la amenaza de huelga puesto que los funcionarios enviados desde La Paz no dieron soluciones concretas. Sin embargo, no recibió respuesta alguna del gobierno. En este clima, ya predispuesto a la movilización, llegaron pobladores de Coroma a la ciudad de Potosí que sostenían un secular problema en torno a límites territoriales con Oruro, más precisamente en torno al cerro Pahua (que se decía era rico en caliza y uranio).

COMCIPO acogió la demanda de Coroma y apoyó su lucha planteándola como una defensa del territorio potosino. Al día siguiente, COMCIPO declaró un paro de 48 horas y convocó a una marcha que tuvo una asistencia multitudinaria en la que planteó once demandas, muchas de ellas de vieja data: la consolidación de las reformas a la Ley de Autonomías, el funcionamiento de Karachipampa, la mitigación del deterioro del Cerro Rico, la construcción de una fábrica de cemento en Coroma, la industrialización del Salar de Uyuni, la conclusión de los trabajos de la carretera sur (entre Tarija y Potosí), la construcción de un aeropuerto internacional, la solución al conflicto de límites entre Coroma y Quillacas, la transferencia de las plantas hidroeléctricas a la Gobernación de Potosí y la definición del tema de las aguas del río Silala.

Al finalizar el paro, se decidió radicalizar las medidas dando un plazo de 48 horas al gobierno para solucionar las demandas, exigiendo a los ministros llegar a la ciudad de Potosí. También se anunció una marcha hacia la sede de gobierno, La Paz⁸.

Sin embargo, los ministros anunciaron que no arribarían a Potosí mientras no se levanten las medidas de presión lo que no hizo otra cosa que agravar el conflicto⁹.

El 29 de julio, se inició la huelga general e indefinida. El gobierno ratificó que los ministros no dialogarían sin que, previamente, se levanten las medidas.

8 *El Potosí*, “Potosinos alistan marcha a La Paz por sus demandas”, 20 de julio de 2010.

9 *El Potosí*, “Potosí radicaliza presión ante la negativa gubernamental”, 30 de julio de 2010.

Para descalificar el movimiento, el gobierno, a través de sus ministros de la Presidencia, Oscar Coca, y del Interior, Sacha Llorenti, denunció que el movimiento tenía móviles políticos, que buscaban desestabilizar al gobierno; afirmaba que los potosinos estaban digitados por el opositor partido Alianza Social y por el propio exalcalde René Joaquino, para evitar su enjuiciamiento y salida de la alcaldía (Llorenti en *El Potosí*, 03/08/2010)¹⁰.

Finalmente, el 9 de agosto, una asamblea de COMCIPO aceptó hablar del tema de Coroma en Sucre y los demás puntos en Potosí mientras que, desde el gobierno, se mantenía la posición de negociar siempre y cuando se levantaran las medidas de presión. El 10 de agosto, se inició el diálogo en Sucre sin mayores frutos, pues si bien los cívicos y el gobernador estuvieron en esta ciudad, los ministros no acudieron a Potosí para resolver los demás puntos, y la comisión tuvo que retornar. Condori señalaba que los ministros de Evo diseñaron una estrategia para enfrentar el conflicto por la vía del cansancio, la provocación de parte de sectores campesinos y la amenaza de juicios.

Finalmente, la huelga cívica que se prolongó por 19 días no obtuvo resultados concretos. Más allá de la instalación de comisiones y la realización de estudios, se postergaron la atención a las demandas. Pese a ello, la población estaba contenta, su demanda de hacer respetar su dignidad había quedado intacta; recibió a Condori y a su comitiva como héroes de la lucha potosina. De esta manera, culminó uno de los episodios más relevantes de la historia cívica de Potosí.

Años después, estalló otro conflicto de similares características. A la cabeza del presidente de COMCIPO, Jhonny Llally, el 25 de junio de 2015 se inició una marcha a la ciudad de La Paz para presentar un pliego petitorio de 26 puntos al presidente Evo Morales, entre los que se incluían una fábrica de cemento, un aeropuerto internacional y la construcción de hospitales. En apoyo a la marcha, el 6 de julio Potosí ingresó en un paro general e indefinido con la instrucción de masificar la marcha y bloquear todas las calles y los accesos a la ciudad. Cabe subrayar que estas medidas, no

10 *El Potosí*, “Gobierno echa gasolina al paro de los potosinos”, 3 de agosto de 2010.

gozaban del apoyo de la COD y de la Federación de Cooperativas Mineras (FEDECOMIN); a esas alturas plenamente articuladas al gobierno del MAS.

Tras 11 días de caminata, la marcha llegó a la ciudad de La Paz y, en su intento de ingresar a la plaza Murillo, fue duramente reprimida. El 9 de julio la acción de las fuerzas del orden alcanzó niveles reprochables puesto que la policía “golpeó a varios de los marchistas, los arrastró por el suelo y luego los detuvo”¹¹. Esto encendió los ánimos tanto de los propios marchistas como de la población potosina, que en respuesta, radicalizaron su posición negándose a negociar con los ministros y exigiendo ser recibidos por el propio presidente Evo Morales.

Tras nueve días de huelga, una reunión de COMCIPO determinó enviar a 500 universitarios a La Paz para reforzar las movilizaciones, a la vez que ratificó la huelga indefinida. A esas alturas, ya se presentaban problemas de aprovisionamiento, centenares de turistas varados en la ciudad y enfermos que eran trasladados en carretillas hasta los centros médicos para recibir tratamiento ante el férreo bloqueo callejero. Al mismo tiempo, desde el gobierno se denunciaba actos vandálicos contra las casas de diputados del MAS, gobernador y alcalde con piedras y bombas molotov¹².

La movilización dio un giro favorable a los cívicos cuando el 18 de julio FEDECOMIN se sumó a la movilización enviando a centenares de trabajadores cooperativistas a La Paz. En un clima de aguda desconfianza se intentó iniciar un diálogo entre COMCIPO y varios ministros, empero el mismo no prosperó debido a que estalló un enfrentamiento donde los marchistas hacían detonar cachorros de dinamita ante la represión policial.

Finalmente, el 24 de julio se dio inicio al diálogo que acordó revisar el cumplimiento del pliego del 2010 y la delegación potosina hizo conocer cada una de las demandas de su agenda de. La respuesta del gobierno siempre la misma: la falta de estudios de factibilidad, la ratificación del cumplimiento de varios acuerdos y su ausencia de responsabilidad sobre algunos puntos que, según ellos, debían ser resueltos por la gobernación o la alcaldía municipal.

11 *Página Siete*, “Policía reprimió violentamente a cívicos potosinos en centro paceño”, 10 de julio 2015.

12 *Página Siete*, “COMCIPO esperará a Evo, el MAS repudia sus actos vandálicos”, 15 de julio 2015.

El 28 de julio el gobierno dio por concluida la negociación y aunque una multitudinaria marcha en Potosí de 200 mil personas ratificó el paro, los marchistas decidieron regresar a la ciudad de Potosí, otra vez con las manos vacías, solo con las promesas del gobierno de mejorar la atención al departamento. Se repetían los resultados de la movilización del 2010.

El 30 de julio, 29 buses llegaron de La Paz a Potosí, transportaban a los cientos de marchistas que habían luchado en esa ciudad, pernoctando en coliseos deportivos y alimentándose con un cotidiano ají de fideo acompañado de un refresco de *mokochinchi* que les preparaban familias de residentes potosinos en La Paz. También llevaban a las 52 personas que habían sido detenidas como producto de los enfrentamientos.

La población les dio un recibimiento como héroes; la caravana de buses en cuyas ventanas ondeaban banderas potosinas, recibían el aplauso de miles de ciudadanos que les mostraban su apoyo y agradecimiento, a la vez que expresaban su repudio al gobierno del MAS.

Quien liderizaba la celebrada delegación era Jhonny Llaly, presidente de COMCIPO, taxista de oficio y exdirigente del transporte. El cívico en su discurso dirigido a la multitud reunida en la avenida Tinkuy señaló que Potosí no había perdido nada que había ganado en dignidad, que “los ispis les habían ganado a los tiburones”¹³.

El 1 de agosto, un consejo consultivo de COMCIPO declaró un cuarto intermedio en la huelga, que había llegado a los 27 días.

René Joaquino, el político desafiante al MAS

En los primeros años de la aplicación del modelo neoliberal parecía que los mecanismos de representación, vía partidos políticos, funcionaban; el respaldo ciudadano a los partidos que habían apoyado la puesta en marcha de la nueva política económica se mantenía. Acción Democrática Nacionalista (ADN), el Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) y el

13 Correo del Sur, “Jhonny Llalli, el impulsor de un diálogo que marcó historia”, 17 de diciembre 2015.

Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) continuaban concentrando el voto y la mayoría de las bancas en el Concejo Municipal, como se puede ver en el cuadro 1.

Cuadro 1
Resultados elecciones municipales en la ciudad de Potosí. Año 1987

Partido político	Votos	Número de concejales
MIR	11.505	5
ADN	4.924	2
MNR	4.269	2
MBL	2.925	1
AP	844	1
ID	654	1

Fuente, El Siglo.

Sin embargo, estos resultados no eran producto de un fortalecimiento de los partidos políticos, sino por el contrario, de sus carencias organizativas, de su menor arraigo en la ciudadanía y de su ausencia de liderazgos. Los partidos cada vez más dependían de figuras y personalidades que llegaban por fuera de los mismos. De los *outsiders*.

Esto ilustra muy bien el triunfo del MIR en las elecciones municipales de 1987. Este partido postuló a una persona conocida y popular antes que a un cuadro del propio partido. Gonzalo Calderón (a la postre el nuevo alcalde de Potosí), no era militante del MIR, sino un comunicador social que había alcanzado notoriedad por el impulso, desde su programa de radio, a la festividad folklórica de Chutillos que, de ser una celebración pequeña y propia de espacios rurales, se convirtió en una masiva entrada folklórica. Calderón, con el amplio beneplácito de la población había logrado que, durante más de ocho horas, distintas fraternidades desfilaran a lo largo de la ciudad bailando alegres danzas del acervo cultural mestizo e indígena como morenada, tinkuy, caporales, moseñada y otros.

En este sentido, el éxito electoral de Calderón marca, de alguna manera, el inicio de la personalización en la política; individuos que llegan desde fuera del sistema de partidos con rasgos discursivos populistas. También

muestra el temprano desgaste, en los espacios subnacionales, de los partidos como mecanismo de mediación entre la población y el Estado.

Dos años después, para las elecciones municipales de 1989, el Acuerdo Patriótico (AP), una coalición entre ADN y el MIR logró vencer con el 44,94% de los votos, obteniendo 7 concejales. El MNR con un 16% de los votos logró dos concejales.

La importante votación conseguida por AP se debe, otra vez, a la notable popularidad de su candidato Gonzalo Calderón quien, en dos años de gestión (1987-1989) había realizado algunas obras de importancia y, sobre todo, convertido la festividad de Los Chutillos, en una celebración folklórica de éxito nacional.

Calderón nunca tuvo mayores ambiciones que fortalecer la fiesta de Chutillos, que tanta popularidad y respaldo a su gestión le dio. Su liderazgo no se conectó con los problemas nacionales y con los diversos conflictos potosinos; no orientó ni asumió una posición política. Para Calderón, los conflictos de Karachipampa, del Cerro de Potosí y del Salar de Uyuni eran asuntos que nada tenían que ver con su gestión, ni parecían interesarle en lo más mínimo, salvo cuando el conflicto alcanzaba tal proporción que exigía alguna postura. Calderón decía no ser político, sino un invitado del MIR.

Esto reflejaba serios problemas dentro del sistema de partidos subnacionales, que se limitaban a ser meras maquinarias electorales que se ponían en funcionamiento para cada elección, pero de escaso trabajo político en el seno de la sociedad civil. Esto, naturalmente, derivaba en la pérdida de representatividad de los partidos políticos, a los cuales la población los veía como entidades ajenas, cuando no como meros instrumentos para el logro del poder y la riqueza.

Las elecciones municipales de 1993 cobraron factura a los tres partidos más importantes. Gonzalo Calderón dejó de ser el candidato del MIR para postular por el MNR. El MIR y ADN abandonaron el proyecto de AP y fueron en candidaturas separadas. La novedad fue la presencia de partidos como Unidad Cívica Solidaridad (UCS) y Conciencia de Patria (CONDEPA). El resultado fue una alta fragmentación en el voto como se puede ver en el siguiente cuadro:

Cuadro 2
Elecciones municipales de 1993. Municipio de Potosí

Partido político	Votos	Número de concejales
MNR	8.509	4
MIR	6.269	2
ADN	1.625	1
UCS		1
CONDEPA	1.552	1
Eje Pachacuti	1.418	1
FSB	1.010	1

Fuente: OEP 2016

Pronto, la fragmentación en la representación política derivó en inestabilidad institucional. Por la normativa electoral, cuando un candidato no conseguía el 50% de los votos más uno, la decisión sobre la elección del nuevo alcalde recaía en el Concejo Municipal, donde, eventualmente, todos los concejales podían ser electos. A eso se debe sumar que, a cada inicio de gestión, dicho concejo podía retirar su confianza al alcalde y elegir uno nuevo.

En enero de 1994 se eligió a Gonzalo Calderón, quien al año siguiente fue sustituido por Jorge Oropeza de UCS, en un contexto de rechazo de la opinión pública. El editorial del periódico local narra de esta manera lo suscitado en la sesión del concejo municipal:

[...] cada uno de los bandos enfrentados interpretó los reglamentos a su antojo dando un espectáculo bochornoso, nada digno de esta instancia del gobierno municipal, actitudes como esa, sin duda, son negativas para Potosí pues el pueblo cree menos en la autodenominada clase política (El Siglo 25/01/1994).

Esta inestabilidad se hizo más notoria a partir de 1994. La comuna potosina, desde ese año, empezó a recibir mayores recursos, producto de la Ley de Participación Popular (LPP), sin que estos recursos se inviertan en proyectos y obras para la ciudad.

Con todo, lo que colmó la paciencia de la población, fue que los concejales municipales, en una sesión reservada, resolvieron incrementar sus

sueldos. Era una determinación secreta en la que, aparentemente, estaban de acuerdo todos. Sin embargo, el concejal René Joaquino Cabrera, del Eje Pachakuti, saltó a la palestra pública a denunciar este hecho, generando indignación hacia los concejales.

Joaquino, tanto por sus orígenes como por su trayectoria de vida era diferente de los otros políticos. Nacido en el ayllu Chicoca Chica de la comunidad Asientos del departamento de Potosí, junto a su familia había migrado al centro minero de Telamayú, donde concluyó sus estudios secundarios, a la vez que trabajó como lamparero en la mina Chorolque. En 1989, se trasladó a la ciudad de Potosí, donde trabajó por un tiempo como albañil, para luego inscribirse en la carrera de Derecho de la Universidad Tomás Frías.

En septiembre de 1997, Braulio Oré renunció al cargo de Alcalde y fue reemplazado por Joaquino, (la mayoría de los concejales estaban inhabilitados de ejercer el cargo por denuncias de corrupción). La corta gestión de Joaquino generó expectativa y respaldo en una población que percibió un cambio en la gestión edil, al punto que, cuando en enero del año siguiente se intentó una maniobra para cambiarlo, la presión y la huelga de hambre de las organizaciones vecinales y gremiales lo impidieron. Uno de los editoriales del periódico *El Siglo* señalaba:

[...] contrariamente a los deseos caprichosos y antojadizos de los politiqueros (MIR, ADN y UCS) que gracias al apoyo del pueblo están donde están, organizaciones populares y representativas de nuestro medio, le dan su apoyo incondicional a Joaquino, un joven alcalde **que en dos meses y 20 días**, hizo lo que en muchos años no se hizo” (*El Siglo*, 05/01/1998. Resaltado mío).

La gestión de Joaquino (con la LPP en marcha) aunque corta, le dio un sólido capital político tanto que, en las elecciones de 1999, logró un histórico 63,19% de la votación consiguiendo nueve concejalías de las once posibles.

Con este apoyo, Joaquino logró una gran transformación en el municipio; con los recursos de la LPP realizó varias obras como el pavimentado de calles, la construcción de mercados, terminal de buses y la dotación de energía eléctrica a barrios periféricos. Logró importantes cambios urbanos

que mejoraron la calidad de vida de la ciudadanía y atenuaron en algo el nivel de pobreza del municipio. Un estudio arrojaba un dato interesante: un 73% de autoridades y concejales municipales de Potosí afirmaban que la vida en sus municipios había mejorado de forma sustancial (Ayo, 2011: 119).

Para las elecciones municipales de 2004 Joaquino presentó su propio partido: Alianza Social (AS). Postulaba ser la cara moderada del indigenismo, proclive al acuerdo y lejos de la lógica revanchista y sectaria que, a su juicio, tenía el MAS de Evo Morales. Basado en la lógica aymara y quechua de la complementariedad entre distintos, el programa de AS señalaba: “construimos la posición de Izquierda Democrática no confrontacional que supera las tendencias hacia el conflicto de los extremismos racistas del indigenismo revanchista y el neoliberalismo blancoide”.

Las elecciones municipales de 2004 ratificaron la popularidad de Joaquino en la ciudad de Potosí. Su partido logró 10 concejales de los 11 posibles (OEP, 2016). Con este favorable contexto político y con los recursos de la LPP pudo darse el lujo de entregar el tramo caminero T'ika Loma-San Antonio, como parte del proyecto de construcción de la avenida de circunvalación, con un costo de 8 millones de dólares. Joaquino acercaba algo ansiado por los potosinos: modernidad.

Asimismo, el AS tuvo un buen desempeño en las elecciones constituyentes de 2006, en la que obtuvo cinco asambleístas. Ya en el cónclave constituyente, AS fue contrario al MAS. Apoyó la demanda referida a los dos tercios de votos para la aprobación de los artículos de la nueva constitución. Respaldo al Comité Cívico de Chuquisaca, en su demanda del retorno de los poderes ejecutivo y legislativo a Sucre, mismo que derivó en la paralización de la Asamblea Constituyente (Flores, 2012).

Mas adelante, para las presidenciales de 2009, AS logró el 13,4% de los electores en el departamento con un fuerte respaldo en la ciudad de Potosí, donde obtuvo 33.186 votos, frente a 62.318 del MAS.

Pocos meses después se realizaron las elecciones municipales. Los resultados fueron ampliamente favorables a AS que ganó con el 51,97%, frente al MAS que consiguió un 33,63%. Pese a los recursos desplegados en la campaña electoral y el apoyo del aparato gubernamental en favor del candidato oficialista César Navarro, las urnas fueron favorables al AS. Joaquino

había mantenido su espacio político, con pocos recursos propagandísticos, pero con el aval de su gestión como alcalde.

Por su parte, AS mostraba como garantía de su futura gestión las obras, entre las que se contaban, el pavimento rígido en zonas marginales, la nueva terminal de buses, la refacción de la Catedral, el parque Tinkuy, el teatro Potosino, el Centro de salud Pailaviri, el césped sintético de la Cancha Santa Bárbara, la iluminación de la mayoría de los distritos, la construcción y refacción de varios colegios. Joaquino proponía la construcción de un segundo anillo de circunvalación, la implementación de un plan estratégico para seguridad Ciudadana, la construcción de mercados modelo y una mejora del centro histórico de la ciudad con mira al potenciamiento del turismo (El Potosí, 05/03/2010).

Finalmente, todo esto resultó intolerable para el gobierno. Ponía en riesgo su dominio sobre un departamento que era un bastión electoral del MAS. A los pocos meses de ser posesionado, se inició un juicio a Joaquino ante la Fiscalía Departamental por malversación de fondos públicos por una compra de autos usados en 2005. El monto llegaba a Bs. 800.000.

Como no podía ser de otra manera, el juicio se desarrolló en medio de un denso ambiente de tensión y polémica. A medida que el juicio transcurría, los seguidores de Joaquino realizaban numerosas marchas y vigiliadas en el frente del poder judicial demandando “se respete el voto del pueblo”. A su vez, tanto los voceros del MAS como los propios jueces señalaban que solo se aplicaba la ley para sancionar las irregularidades de quienes adquirieron autos usados. En un determinado momento los jueces denunciaron acoso psicológico por parte de los seguidores de Joaquino, ya que en sus casas se colocaban una serie de objetos propios de la brujería andina¹⁴.

Finalmente, conforme a la nueva ley de gobiernos municipales, sancionada por la mayoría masista en la Asamblea Legislativa, que en su artículo 48 indicaba que los alcaldes podían ser suspendidos a sola solicitud de la Fiscalía, el conflicto pasó al Concejo Municipal para que proceda a la solicitud, bajo conminación de proceso en caso de incumplimiento.

14 *Correo del Sur*, “El juicio a René Joaquino inicia en medio de acusaciones e insultos”, 13 de julio 2010.

Sin embargo, el Concejo no pudo reunirse, una multitud aglomerada en la puerta del salón de deliberaciones impidió el ingreso de los legisladores municipales. Una seguidora de Joaquino señalaba, “hemos tomado la Alcaldía. No nos vamos a mover de aquí, vamos a estar hasta las últimas consecuencias. Si nos quieren sacar, nos van a sacar muertos de aquí. Queremos respeto a nuestro voto. Eso es lo que queremos” (CIAC-IDR, 28/07/2010). Finalmente, en agosto de 2010, Joaquino fue suspendido de sus funciones, con lo que finalizó uno de los liderazgos regionales más sólidos de las últimas décadas en el departamento. La falta de conocimiento de los procesos administrativos, así como la utilización de la justicia con fines políticos, derrumbaron a René Joaquino Cabrera, abriendo en el municipio una etapa de ingobernabilidad, corrupción e ineficiencia.

¿Potosí deja de ser una periferia pasiva?

Las últimas elecciones municipales han mostrado la emergencia de un liderazgo en la persona de Jhonny Llally, que señala la importancia de COMCIPO, espacio en el que este líder ha logrado notoriedad y capital político. No es casual, por tanto, que su partido lleve el denominativo de Movimiento Cívico Popular (MCP).

A nuestro juicio esto es efecto de un profundo cambio en la conducción de la entidad cívica. Como vimos, hasta junio de 2010 esta organización era un instrumento del sindicalismo minero y de la COD que vehiculizaba sus intereses ideológicos y sectoriales a través de COMCIPO.

Este espacio es asumido por actores provenientes de las clases medias urbanas, con un mayor interés por la lucha territorial que por la de clase. En otros términos, desde 2010, en las movilizaciones de COMCIPO domina el clivaje territorial antes que el de clase, lo que explica la virulencia de las protestas y su duración: 19 días de huelga en 2010 y 27 días en 2015, ambas contra el dominio del centro estatal. La aparición y el rendimiento electoral de Llally en 2021, no es casual; su liderazgo y discurso se construyeron en torno a la defensa de los intereses potosinos.

El otro actor es René Joaquino, quien durante su gestión como alcalde desarrollo una notoria oposición a las pulsiones centralizadoras del MAS, al punto que este partido no tuvo otra salida que sacarlo de su cargo a través de un juicio que tuvo todos los ribetes de un uso político de la justicia. Posteriormente, a su salida del gobierno municipal, Joaquino tuvo una actuación errática y confusa al punto que fue electo por el MAS como senador. Empero, su notable votación conseguida de 30,66% en las elecciones de 2021, indica que tanto su posición de centro político como su gestión como alcalde han quedado en la memoria de la ciudadanía.

Por tanto, tenemos en el municipio potosino a dos actores contrarios al centralismo del MAS en el poder. Aquí, la pregunta es si esto es suficiente para un cambio en la relación centro periferia; en otros términos, la aparición de un clivaje territorial. Veamos más de cerca este asunto. Un clivaje necesita tres elementos: identidad, instituciones y liderazgo (Kriesi, 1998). Potosí posee una identidad fuerte, tiene una institución sólida como es COMCIPO y tiene un liderazgo basado, por de pronto, en Llally y Joaquino.

Sin embargo, esto no parece ser suficiente ya que su principal élite económica, los cooperativistas mineros, continúan sin articularse políticamente en torno al territorio; en otras palabras, no han terminado de ensamblar sus intereses económicos con los de la región. En este contexto, a los cooperativistas no les interesa establecer alianzas duraderas con instituciones de la sociedad civil, ni copar los espacios de poder locales. Los cooperativistas no se esfuerzan por potenciar a COMCIPO sino que buscan controlarlo, colocando algún representante en el directorio o poniéndose al frente en momentos de conflicto. De hecho, su relación con la entidad cívica es instrumental, la apoyarán cuando esto no ponga en riesgo sus intereses y la denostarán y la atacarán con fiereza cuando ocurra lo contrario.

Ya no se trata de aquel obrero de la COMIBOL fuertemente ideologizado y con una retórica revolucionaria. Lo que se puede ver es una suerte de pragmatismo político que le ha permitido coaligarse tanto con los regímenes de facto como con los democráticos (parecería que a los cooperativistas no les interesa el tipo de gobierno que este en el poder, siempre y cuando favorezca o por lo menos no afecte sus intereses). De este modo, se puede entender cómo, muy rápidamente, se afilian a la corriente del MNR en

1985 y luego a su antípoda el MAS en 2003, adoptando la retórica de las corrientes de izquierda.

Por tanto, si bien se puede hablar de la existencia de un clivaje, el mismo es débil y frágil al punto que sus liderazgos (Llally y Joaquino), pueden ser anulados, controlados o cooptados por el gobierno central.

Por ello, en el momento en que la élite económica y social más poderosa como son los cooperativistas mineros ingresen a fortalecer el poder territorial de la periferia potosina, quizá sea posible pensar en un cambio en su destino de pobreza y marginalidad.

Bibliografía

Agirakis, Helena

2012 “Regionalismo y mitos ideológicos como dispositivos de poder para la construcción del imaginario de la autonomía departamental”. En *Ensayos sobre autonomías en Bolivia*, 61-86. La Paz: FES-ILDIS.

Ayo, Diego

2011 *Democratizando la democracia, una mirada a la participación popular en los albores de la Bolivia de las autonomías*. La Paz: PNUD-IDEA.

1999 *Los desafíos de la participación popular*. La Paz: CEBEM.

Burbano de Lara, Felipe

2014 *La revuelta de las periferias. Movimientos regionales y autonomías políticas en Bolivia y Ecuador*. Quito: FLACSO.

Burke, Melvin

1987 *The Corporación Minera de Bolivia (Comibol) and the Triangular Plan: A Case Study in Dependency*. Acceso el 7 de enero de 2010. http://digitalcommons.library.umaine.edu/eco_facpub/16.

Bril-Mascarenhas, Tomas, Maillet, Antoine, & Mayaux, Pierre-Louis

2017 “Process tracing. Inducción, deducción e inferencia causal”. *Revista de ciencia política (Santiago)*, 37(3), 659-684. <https://dx.doi.org/10.4067/S0718-090X2017000300659>.

- Calderón, Fernando y Roberto Laserna
 1983 *El poder de las regiones*. Cochabamba: CERES.
- Dunkerley, James
 1987 *Rebelión en las venas, la lucha política en Bolivia 1952-1982*. La Paz: Quipus.
- Espinoza, Jorge
 2010 *Minería boliviana, su realidad*. La Paz: PLURAL.
- Exeni, José Luis
 2016 *Democracia impactada*. La Paz: PLURAL
- Flores Franz
 2011 “19 días y 500 noches en la política potosina, dispositivos identitarios, fisuras sociales y movimientos regionales (2005-2010)”. *Tinkazos*, N°. 30: 105-126.
- Flores, Franz
 2012 “Elites, identidades colectivas y movilización social. El conflicto por la capitalía de Sucre en 2007”. *Surgiendo 1*: 27-46.
- Gray Molina, George
 1997 *Construyendo políticas públicas en Bolivia*. La Paz: UDAPSO
- Kriesi, Hanspeter
 1998 “The transformation of cleavages politics: the 1997 Stein Rokkan lecture”, *European Journal of Political Research* (European Consortium for Political Research), N° 2.
- Laserna, Roberto
 1987 “Descentralización y reforma del Estado”. En *Democracia a la deriva*, compilado por René Mayorga, 373-394. La Paz: CLACSO-CERES.
- Lavaud, Jean-Pierre
 1998 *El embrollo boliviano, turbulencias sociales y desplazamientos políticos 1952-1982*. Lima: IFEA, CESU. HISBOL.
- Molina, Carlos Hugo
 2005 *Autonomía y descentralización*. La Paz: AIPE.
- O'Donnell, Guillermo
 2004 *Acerca del Estado en América Latina contemporánea. Diez tesis para la discusión*. PNUD-Universidad de Notre Dame. Acceso

- el 13 de abril de 2014. <http://www.centroedelstein.org.br/PDF/acercadelestado.pdf>
- Peña, Claudia y Nelson Jordán
2006 *Ser cruceño en octubre*. La Paz: PIEB.
- Roca, José Luis
1980 *Fisonomía del regionalismo boliviano*. La Paz: Los amigos del libro.
- Rokkan, Stein y Derek Urwin
1982 *The politics of territorial identity*. Londres: Sage.
- Salman, Tom
2013 “El Estado, los movimientos sociales y el ciudadano de a pie”. *América Latina Hoy*, N° 65, 141-160.
- Sivak, Martín
2007 *Santa Cruz: una tesis*. La Paz: Plural.
- Soruco, Ximena, Wilfredo Plata y Gustavo Medeiros
2008 *Los barones del oriente. El poder en Santa Cruz, ayer y hoy*. Santa Cruz: Fundación Tierra.
- Torrico, Mario
2014 “Bolivia: nuevo sistema electoral presidencial y coordinación política de los partidos”. *Perfiles Latinoamericanos*, N° 43: 77-102.
- Vergara, Alberto
2015 *La danza hostil. Poderes subnacionales y Estado central en Bolivia y Perú (1952-2012)*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
- Whitehead, Laurence
1973 *Poder nacional y poder local, el caso de Santa Cruz de la Sierra* (inédito).
- Weber, Max
2002 *Economía y sociedad, esbozo de una sociología comprensiva*. Tomo II: 1047-1076. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
- Zegada, María
2007 En nombre de las autonomías, crisis estatal y procesos discursivos en Bolivia. La Paz: PIEB.